

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 003 2020 00063 00 promovido por el señor **GUSTAVO DE JESUS CIFUENTES** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia emitida el 1º de noviembre de 2022 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **048**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Gustavo de Jesús Cifuentes demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo debidamente indexado, y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez por medio de la Resolución 009821 de 2005, bajo los parámetros del régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 758 de 1990. El 27 de marzo de 1979 contrajo matrimonio con la señora María Esther Herrera de Cifuentes, quien depende económicamente de él por no tener ingresos, ni rentas que le permitan su independencia económica. Aduce que agotó reclamación administrativa.

En sentencia proferida el 1º de noviembre de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones allegó oportunamente escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia, precisando que, si bien el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que en aplicación al régimen de transición se conservará la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez prevista en el régimen pensional anterior; no quedaron involucrados los incrementos por persona a cargo. Alude a la sentencia SU – 140 de 2019, en donde la Corte Constitucional precisa que los incrementos pensionales en efecto fueron derogados por la Ley 100 de 1993 a partir de su entrada en vigencia, incluso para los beneficiarios del régimen de transición, siendo posible su reconocimiento únicamente cuando el derecho pensional se circunscribe a las disposiciones del Decreto 758 de 1990.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia consiste en determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo, debidamente indexado.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental obrante en el expediente digital, la Sala encuentra: i) Que mediante Resolución 009821 de 2005 el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones le concedió al señor Gustavo de Jesús Cifuentes la pensión de vejez, a partir del 7 de octubre de 2004, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (ii) Que el demandante contrajo matrimonio católico con la señora María Esther Herrera de Cifuentes el 27 de marzo de 1979. Y iii) Que el 6 de marzo de 2018 el actor le reclamó a Colpensiones el incremento por cónyuge a cargo, y en la misma fecha la entidad de seguridad social le negó la prestación aduciendo que según lo dispuesto en la Circular Interna 01 de 2012 la pensión de vejez le fue reconocida con posterioridad al 1º de abril de 1994, por lo que no es procedente el reconociendo de incrementos pensionales.

DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS A CARGO

Los incrementos pensionales por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, constituían una prerrogativa que se aplica a la pensión mínima legal y se accede a ella cuando el cónyuge o compañero permanente del beneficiario de la prestación depende de éste y no disfruta de una pensión, o cuando los hijos son menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes o son inválidos no pensionados, siempre que dependieran económicamente del beneficiario.

Esta Sala de Decisión concedió los incrementos pensionales por personas a cargo en tratándose de pensiones reconocidas al amparo del acuerdo 049 de 1990 respecto de los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atendiendo el criterio esbozado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero un nuevo estudio del tema a la luz de las sub reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-140 de 28 de marzo de 2019 llevó a la Sala a considerar el cambio de postura para aplicar el nuevo criterio expuesto por el órgano de cierre a nivel constitucional.

En la sentencia de unificación referida, la Corte Constitucional determinó que los incrementos previstos en el decreto 758 de 1990, para las pensiones mensuales de invalidez y vejez por cónyuge, compañero (a) o hijos menores o inválidos a cargo del beneficiario fueron derogados por la Ley 100 de 1993, aún para los asegurados favorecidos con el régimen de transición, ello sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes hubieran cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1º de abril de 1994, en razón a que como lo dispone el artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, estos reajustes no forman parte de la pensión, a más que el artículo 36 del estatuto integral de seguridad social, solo mantuvo los beneficios del régimen anterior en cuanto refiere a edad, semanas de cotización o tiempo de servicio y el monto de la pensión, entendiendo esta como la tasa de reemplazo, excluyéndose así los incrementos en comento, adicionalmente teniendo en cuenta que el acto legislativo 01 de 2005 estableció de forma expresa que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiese efectuado las cotizaciones, a más de solo poderse considerar un derecho adquirido, de forma exclusiva, para aquellas personas que consoliden su derecho antes de la ley 100 de 1993.

A juicio de la Corporación de Constitucional mencionada, los incrementos previstos por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 carecen, por disposición expresa de la ley, de cualquier naturaleza pensional, y por otra parte, las disposiciones que incluyó el acto legislativo 01 de 2005 sobre el artículo 48 superior no permiten la posibilidad de aplicar los incrementos pensionales que

previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 sobre cualquier pensión que se hubiera causado después de expedida la Ley 100 de 1993.

Como se indicó en precedentes, por medio de la Resolución 009821 de 2005 el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones le concedió al señor Gustavo de Jesús Cifuentes la pensión de vejez, a partir del 7 de octubre de 2004, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el actor causó el derecho a la prestación económica con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley mencionada, razón por la cual, no hay lugar al incremento pensional por cónyuge a cargo.

Es de anotar que la discusión relativa a la prescriptibilidad de la acción tendiente a la obtención de dichos incrementos resulta inane pues la prescripción extintiva sólo puede operar cuando existe un derecho susceptible de prescribir.

Así las cosas, se confirmará la decisión absolutoria que se revisa en consulta.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en consulta.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 6aa89517f683e234b9719e9fe912d44fa1b8455f6bf5136066735ce4a20f97c8

Documento generado en 23/02/2023 02:23:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>